



Asamblea General

Distr. general
9 de septiembre de 2019
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 85º período de sesiones (12 a 16 de agosto de 2019)

Opinión núm. 32/2019 relativa a Saeed Malekpour (República Islámica del Irán)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 33/30.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 8 de abril de 2019 al Gobierno de la República Islámica del Irán una comunicación relativa a Saeed Malekpour. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. La República Islámica del Irán es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Saeed Malekpour, de 44 años de edad, es nacional de la República Islámica del Irán y tiene derecho de residencia permanente en el Canadá. Antes de su detención, el Sr. Malekpour trabajaba por cuenta propia como diseñador de sitios web, programador y experto en tecnologías de la información. Creó un programa informático de código abierto para mejorar el proceso de carga de imágenes en sitios web. No había sido objeto de condenas penales previas a su detención en el presente caso.

Antecedentes

5. Según la fuente, a mediados de la década de 2000, la República Islámica del Irán emprendió una estricta campaña de censura en los medios de comunicación a fin de bloquear el acceso a Internet y sustituirla por otra red aprobada internamente. Esa campaña tenía por objeto regular todo el contenido publicado en línea para poder someterlo a un mayor nivel de censura y protección contra los ciberataques. A principios de 2011, el Jefe de la Policía desplegó agentes de la unidad cibernética por todas las ciudades del país para poner freno a las ciberamenazas y restringir el contenido de origen extranjero. En septiembre del mismo año, se anunció en los medios de comunicación que la República Islámica del Irán estaba reuniendo a un “ciberejército” de 250.000 personas para luchar contra la corrupción en Internet y las “infiltraciones externas procedentes de Occidente”. A principios de enero de 2012, se bloqueó el acceso a innumerables sitios web por parte de los usuarios de Internet iraníes después de que la policía cibernética comenzase a vigilar a los usuarios de cibercafés, y más de 30 millones de iraníes perdieron el acceso a diversos servicios de Internet a raíz del rastreo de sus nombres de usuario y huellas digitales.

6. La fuente informa de que, con frecuencia, el Gobierno ha privado de la libertad y enjuiciado a expertos y periodistas de Internet por cargos vagamente definidos como de seguridad nacional. Al parecer, las personas detenidas han sido sometidas a graves torturas y se les ha privado de asistencia letrada durante la fase de instrucción de su período de privación de libertad. La fuente sostiene que esta campaña ha tenido en su punto de mira a los blogueros y expertos en tecnologías de la información, así como a todas las medidas encaminadas a fomentar y facilitar la libre circulación de información por Internet. Según la fuente, en enero de 2018 la República Islámica del Irán había detenido y privado de libertad a unas 30 personas, en su mayoría con doble nacionalidad. Según el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la detención generalizada de activistas de los derechos humanos tenía por blanco una red de personas implicadas en actividades corruptas por Internet.

Detención, privación de libertad y condena

7. La fuente informa de que en octubre de 2008 el Sr. Malekpour emprendió un breve viaje a la República Islámica del Irán para visitar a su familia y, poco después de su llegada (el día 4 de ese mes), fue secuestrado y detenido cerca de la plaza Vanik, situada en el norte de Teherán. En una operación desplegada para reprimir las actividades “inmorales” o “contrarias al islam”, varios agentes de seguridad no uniformados pertenecientes a la unidad encargada de la ciberdelincuencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica agarraron al Sr. Malekpour, le vendaron los ojos y lo introdujeron por la fuerza en su vehículo. Uno de los agentes mantuvo al Sr. Malekpour inmovilizado, asfixiándolo para impedirle que pidiese ayuda.

8. La fuente sostiene que los agentes de seguridad no presentaron ninguna orden de detención cuando detuvieron al Sr. Malekpour ni le explicaron los motivos de dicha detención. El Sr. Malekpour fue trasladado a un lugar desconocido, al que sus captores llamaban la “oficina técnica”, donde fue apaleado brutalmente por varios individuos. La fuente sostiene además que el Sr. Malekpour, mientras seguía teniendo los ojos vendados, fue obligado a firmar documentos sin que nadie le dijese qué estaba firmando. No se le permitió establecer contacto alguno con su familia ni con un abogado.

9. Según la fuente, el Sr. Malekpour fue ulteriormente transferido al pabellón 2A de la prisión de Evin, donde permaneció recluido en régimen de aislamiento hasta el 16 de agosto de 2009 (unos 320 días) en una celda de una superficie inferior a 3,5 m². La fuente señala que el tamaño mínimo aceptable de una celda es de 5,4 m²¹ y aduce que el aislamiento prolongado en tales condiciones es de por sí una forma de tortura. El Sr. Malekpour durmió en el suelo y se lo mantuvo con los ojos vendados durante las dos salidas diarias de su celda cuando se le permitió efectuar dichas salidas. No estaba autorizado a hablar con otros reclusos o familiares ni a consultar a un abogado.

10. La fuente sostiene que el Sr. Malekpour fue apaleado brutalmente en varias ocasiones durante su período de encarcelamiento en la prisión de Evin. Según la fuente, fue apaleado con cables y porras bajo el pretexto de un “interrogatorio”. Tan pronto como el Sr. Malekpour perdía el conocimiento mientras era apaleado, sus captores lo empapaban con agua fría a fin de proseguir la paliza. La fuente afirma que, una vez, la paliza fue tan violenta que el Sr. Malekpour perdió la movilidad de una parte de su cuerpo. El Sr. Malekpour fue trasladado a un hospital civil con un nombre falso, y se lo amenazó con que sería sometido a formas de tortura más graves si revelaba la verdad. Antes de la cita médica del Sr. Malekpour, un miembro del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica habló con el médico, que seguidamente se negó a atender al Sr. Malekpour diagnosticándole en cambio formalmente un estado de “estrés”. En otra ocasión, el Sr. Malekpour fue desnudado y se lo mantuvo inmovilizado mientras un interrogador del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica lo amenazaba con cometer un acto grave de violencia sexual en su contra.

11. La fuente añade que, en enero de 2009, un interrogador del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica causó al Sr. Malekpour una fractura de la mandíbula y la rotura de varios dientes. Según la fuente, el juez que se asignó al caso del Sr. Malekpour había supervisado muchas de las sesiones de tortura. El Sr. Malekpour terminó por sucumbir a los actos de tortura física y psicológica y fue obligado a hacer una confesión amañada en la televisión nacional. Si bien el Gobierno afirmó que el programa informático desarrollado por el Sr. Malekpour se utilizaba en sitios web de pornografía persas, la fuente sostiene que su utilización en esos sitios web se hizo sin que el Sr. Malekpour lo supiera.

12. Según la fuente, el Sr. Malekpour fue trasladado al pabellón general de la prisión de Evin, donde se lo autorizó a que recibiera un reducido número de visitas de su familia bajo estricta supervisión. El 21 de diciembre de 2009, el Sr. Malekpour volvió a ser recluido en régimen de aislamiento, en que permaneció hasta el 8 de febrero de 2010.

13. El juicio del Sr. Malekpour comenzó el 29 de noviembre de 2010. La fuente afirma que, si bien el Sr. Malekpour estuvo representado por un abogado, solo se le permitió hablar con él unos minutos antes de que empezase el juicio. No se permitió que el abogado del Sr. Malekpour examinara las pruebas ni celebrara otras consultas privadas con su cliente y, además, tan solo se le concedió un acceso limitado al expediente y se le prohibió realizar copias de este.

14. El Tribunal Revolucionario Islámico admitió como prueba la confesión que se había grabado, haciendo caso omiso de las reiteradas denuncias del Sr. Malekpour respecto de la manera en que se le había extraído esa confesión, a saber, mediante tortura y bajo amenazas contra su familia. El Tribunal desestimó las denuncias de tortura y otros malos tratos calificándolas de mentiras y, además, tampoco accedió a la petición formulada por la defensa del Sr. Malekpour de que permitiera que un experto en tecnologías de la información prestase testimonio sobre los aspectos técnicos del programa informático.

15. En diciembre de 2010, el Sr. Malekpour fue declarado culpable y condenado a muerte por los siguientes delitos tipificados en el Código Penal Islámico: a) propagación de la corrupción (art. 286), b) insultos al Líder Supremo (art. 514), c) insultos al Presidente (art. 514), d) insultos a las santidades islámicas (art. 513), y e) difusión de propaganda contra el régimen revolucionario (art. 500). En junio de 2011, el Tribunal Supremo de la República Islámica del Irán revocó la pena de muerte del Sr. Malekpour y ordenó que su

¹ Véase la lista de verificación de establecimientos penitenciarios en situaciones posteriores a un conflicto titulada “A prison evaluation checklist for post-conflict settings”.

caso se sometiera a un nuevo juicio. Sin embargo, la fuente informa de que la confesión forzada volvió a admitirse como prueba en el nuevo proceso y que el Sr. Malekpour fue condenado a muerte otra vez en noviembre de 2011. En enero de 2012, el Tribunal Supremo confirmó la pena de muerte y, en agosto de 2013, según informa la fuente, el Gobierno conmutó esa pena por otra de cadena perpetua.

16. La fuente afirma que el Sr. Malekpour sigue siendo víctima de actos de tortura y períodos de reclusión en régimen de aislamiento en la prisión de Evin. Se le limita la comunicación con su familia y se encuentra en mal estado de salud. La falta de atención médica y odontológica adecuada ha agravado sus problemas respiratorios y de alimentación. En los últimos seis meses, el Sr. Malekpour fue hospitalizado de urgencia dos veces. Las autoridades se negaron a informar a su familia de que había ingresado en el hospital y de la naturaleza de las dolencias de que padecía. Cuando sus amigos consiguieron localizarlo, lo encontraron esposado a una cama de hospital. Desde entonces, el Sr. Malekpour ha sido encarcelado de nuevo a pesar del empeoramiento de su estado de salud. Se le deniega la atención de seguimiento que, según los médicos, necesita urgentemente. La fuente subraya que, en tales condiciones, la vida del Sr. Malekpour está en peligro. El Sr. Malekpour ha sido privado de su libertad durante casi 11 años.

17. El Sr. Malekpour fue objeto de dos llamamientos urgentes enviados por varios titulares de mandatos de los procedimientos especiales los días 31 de diciembre de 2010 (IRN 38/2010) y 16 de febrero de 2012 (IRN 2/2012)². El Grupo de Trabajo lamenta que no se haya recibido ninguna respuesta del Gobierno a estas comunicaciones.

Análisis jurídico

18. La fuente sostiene que la detención del Sr. Malekpour es arbitraria y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

19. En relación con la categoría I, la fuente afirma que las autoridades infringieron el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 9 2), y 14 3), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 32 de la Constitución de la República Islámica del Irán³. En el caso que nos ocupa, los agentes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica detuvieron al Sr. Malekpour sin informarle de los motivos de su detención, ya sea de forma oral o escrita, así como tampoco lo informaron de los cargos que pesaban en su contra hasta que se celebró el juicio, es decir, un año después. No se envió ningún expediente preliminar a las autoridades judiciales y el Sr. Malekpour no tuvo la oportunidad de comparecer ante un juez hasta la fecha de su juicio, es decir, más de un año después de su detención inicial.

20. En relación con la categoría II, la fuente alega que el Sr. Malekpour fue detenido por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Sr. Malekpour fue condenado a muerte por el delito de propagación de la corrupción, con motivo de su presunta gestión de sitios web de pornografía. La fuente recuerda que, antes de octubre de 2008, el Sr. Malekpour creó un programa informático que podía utilizarse para publicar de manera eficaz imágenes en Internet. Hizo público el código de este programa informático mediante la distribución de una licencia gratuita de código abierto, por lo que cualquier persona, con independencia del lugar en que se encontrase, podía utilizar libremente una copia del programa para publicar imágenes en su propio sitio web. Una de las condiciones de esa licencia era que se reconociese la creación del programa informático por el Sr. Malekpour mediante la correspondiente mención. La fuente sostiene que el Sr. Malekpour ejerció su derecho a

² El segundo llamamiento urgente puede consultarse en la siguiente dirección:

<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=19839>.

³ Según la fuente, en el artículo 32 de la Constitución se establece que “nadie puede ser detenido si no es según el procedimiento previsto por la ley. Toda persona detenida ha de ser informada inmediatamente y por escrito de los cargos que pesan en su contra y los motivos de la acusación, y se debe transmitir un expediente preliminar a las autoridades judiciales competentes en un plazo máximo de 24 horas para que las diligencias preliminares previas al juicio puedan llevarse a cabo tan rápidamente como sea posible”.

facilitar la difusión de información a través de un programa informático que creó a efectos de información general, es decir, para que otros pudieran cargar las imágenes que quisieran. No obstante, según sus interrogadores, el código fue incorporado en algún momento por un tercero a algunos sitios web de pornografía.

21. En relación con la categoría III, la fuente sostiene que el Gobierno violó el derecho del Sr. Malekpour a un juicio imparcial. Según la fuente, el Sr. Malekpour se vio privado de los siguientes derechos a las garantías procesales:

a) El derecho a comparecer ante un tribunal en un plazo razonable y sin dilaciones, reconocido en el artículo 9 3), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

b) La presunción de inocencia garantizada por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 2), del Pacto;

c) El derecho a la protección contra la tortura y los malos tratos, reconocido en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto, así como el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo o a declararse culpable, previsto en el artículo 14 3) g), del Pacto;

d) El derecho a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial, reconocido en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 1), del Pacto;

e) El derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

f) El derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, reconocido en el artículo 14 3) b), del Pacto.

22. Según la fuente, el juicio del Sr. Malekpour se aplazó de manera injustificada por aproximadamente un año. Le otorgaron un trato de condenado después de que se lo hubiera obligado a confesar mediante actos brutales de tortura. Durante casi un año el Sr. Malekpour estuvo sometido en repetidas ocasiones a actos de tortura que, a veces, llegaron incluso a causarle pérdidas de conciencia y que consistieron, entre otras cosas, en intensas palizas con porras y cables de metal. También recibió puntapiés en el rostro y amenazas de agresiones sexuales violentas y de muerte. Estos actos de tortura tuvieron por objeto extraerle una confesión falsa, que se utilizó para condenarlo a una pena capital. La admisión como prueba de una declaración obtenida mediante tortura menoscaba la imparcialidad de todo el proceso. Tampoco se brindó al Sr. Malekpour tiempo suficiente para que pudiera comunicarse con su abogado o preparar su defensa de manera eficaz.

23. En relación con la categoría V, la fuente sostiene que la discriminación de una persona en razón de su nacionalidad o país de residencia contraviene el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el presente caso, la residencia permanente del Sr. Malekpour en el Canadá lo convirtió en el blanco de ataques. Según la fuente, el primer intercambio de embajadores entre la República Islámica del Irán y el Canadá se remonta a 1996 pero, desde entonces, el Canadá ha limitado el alcance de las conversaciones bilaterales a los derechos humanos y las cuestiones nucleares. La fuente sostiene que este contexto explica la situación del Sr. Malekpour. El veredicto que se dictó en su contra fue discriminatorio, ya que se basó en su condición de residente permanente en el Canadá, así como en otros motivos como su carrera de ingeniero de programas y programador informático.

Respuesta del Gobierno

24. El 8 de abril de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que antes del 7 de junio de 2019 proporcionara información detallada sobre la situación actual del Sr. Malekpour. El Grupo de Trabajo también pidió al Gobierno que aclarase las disposiciones jurídicas que justificaban su privación de libertad,

así como su compatibilidad con las obligaciones de la República Islámica del Irán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Además, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno a que garantizara la integridad física y mental del Sr. Malekpour.

25. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta del Gobierno a esta comunicación. El Gobierno no solicitó una prórroga del plazo para responder, posibilidad prevista en los métodos de trabajo del Grupo.

Deliberaciones

26. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

27. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

28. La fuente sostiene que las autoridades no cumplieron los procedimientos iraníes e internacionales de detención. Según indica, no se mostró al Sr. Malekpour ninguna orden de detención cuando fue detenido el 4 de octubre de 2008 y tampoco se le comunicaron en ese momento los motivos de dicha detención. Además, la fuente sostiene que el Sr. Malekpour solo fue informado de los cargos que pesaban en su contra en el momento de su juicio, es decir, más de dos años después de su detención⁴. Aunque tuvo la oportunidad de hacerlo, el Gobierno no ha impugnado esas alegaciones.

29. Según el artículo 9 1), del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. En el presente caso, el Sr. Malekpour fue detenido sin que mediara orden de detención y en ese momento no se lo informó de los motivos de su detención, en contravención de lo dispuesto en el artículo 9 1) y 2), del Pacto. Además, tampoco fue informado con prontitud de los cargos que pesaban en su contra, lo que contraviene el artículo 9 2), del Pacto. Así pues, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención y en cumplimiento de otros procedimientos, como la exposición de los motivos de la correspondiente detención y la notificación sin demora de los presuntos cargos⁵.

30. La fuente sostiene, además, que el Sr. Malekpour no fue llevado prontamente ante un juez para impugnar la legalidad de su detención. Según indica, el Sr. Malekpour solo compareció ante un juez en su juicio que comenzó el 29 de noviembre de 2010, es decir, más de dos años después de su detención. El Gobierno no ha desmentido esta alegación. Esto constituye una vulneración manifiesta del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Además, de la información proporcionada por la fuente se desprende que se mantuvo al Sr. Malekpour incomunicado y, durante períodos prolongados, confinado en régimen de aislamiento, como el comprendido entre el 4 de octubre de 2008, fecha de su detención, y el 16 de agosto de 2009, como mínimo. Como ha sostenido sistemáticamente el Grupo de Trabajo, la reclusión de personas en régimen de incomunicación vulnera su derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal, reconocido en el artículo 9 4), del Pacto⁶. La supervisión judicial de la privación de libertad es una salvaguardia fundamental de la

⁴ La fuente declara que no se informó al Sr. Malekpour de los motivos de su detención ni se le notificaron los cargos que pesaban en su contra hasta que se celebró el juicio, es decir, más de un año después de su detención. Sin embargo, parece ser que estas diligencias procesales tan solo se llevaron a cabo más de dos años después de que se detuviera al Sr. Malekpour. Según la fuente, el Sr. Malekpour fue detenido el 4 de octubre de 2008 y su juicio comenzó el 29 de noviembre de 2010. El Grupo de Trabajo no considera que este detalle afecte a la credibilidad de las alegaciones de la fuente.

⁵ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 46/2018, párr. 48, y 36/2018, párrs. 39 y 40.

⁶ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 46/2017 y 45/2017.

libertad personal⁷ y resulta esencial para garantizar que la reclusión tenga fundamento jurídico. Dado que el Sr. Malekpour no pudo impugnar su privación de libertad, también se violó su derecho a interponer un recurso efectivo en virtud del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2 3), del Pacto.

31. Por último, el Grupo de Trabajo considera que los cargos que se imputaron al Sr. Malekpour y por los que se lo condenó en un principio a muerte, en particular la propagación de la corrupción, los insultos al Líder Supremo, al Presidente y/o a las santidades islámicas, y la difusión de propaganda contra el régimen revolucionario, tipificados en los artículos 286, 500, 513 y 514 del Código Penal Islámico, son tan poco precisos y tan excesivamente generales que es imposible invocar un fundamento jurídico que justifique la privación de libertad. En diversas ocasiones, el Grupo de Trabajo ha planteado al Gobierno la cuestión del ejercicio de la acción penal en cumplimiento de leyes penales excesivamente generales que adolecen de imprecisión⁸. Además, como el Grupo de Trabajo ha declarado en ocasiones anteriores, el principio de legalidad exige que las leyes se formulen con precisión suficiente a fin de que sean accesibles y comprensibles para el ciudadano, de modo que este pueda modificar su conducta en consecuencia⁹. El Sr. Malekpour no podía adivinar que la publicación de un programa informático de código abierto constituiría una conducta delictiva en virtud de tales disposiciones.

32. Por las razones antes expuestas, el Grupo de Trabajo concluye que el Gobierno no estableció un fundamento jurídico para la detención y reclusión del Sr. Malekpour. Por consiguiente, su privación de libertad es arbitraria con arreglo a los criterios de la categoría I.

33. Además, la fuente sostiene que el Sr. Malekpour fue detenido por haber ejercido de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto. Según la fuente, el Sr. Malekpour creó un programa informático que podía utilizarse para publicar de manera eficaz imágenes en sitios web. Hizo público el código de este programa informático mediante la distribución de una licencia gratuita de código abierto a fin de que cualquier persona, con independencia del lugar en que se encontrara, pudiera utilizarlo para publicar imágenes en su propio sitio web. El Sr. Malekpour fue perseguido penalmente porque, al parecer, un tercero desconocido había utilizado el programa en sitios web de pornografía, a pesar de que el Sr. Malekpour no tuviera conocimiento de que a su programa se le estaba dando ese uso. El Sr. Malekpour fue privado de su libertad por haber facilitado la difusión de información a través de un programa informático¹⁰. El Gobierno no ha expuesto ningún otro motivo para explicar la detención, la privación de libertad y el enjuiciamiento del Sr. Malekpour.

34. El Grupo de Trabajo recuerda que en el artículo 19 2), del Pacto se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El Grupo de Trabajo considera que la publicación por el Sr. Malekpour del código de programación mediante la distribución del programa informático a fin de que otros puedan publicar imágenes en línea se inscribe claramente dentro de los límites del derecho a la libertad de expresión protegido por las disposiciones del artículo 19 2), del Pacto. Las actividades llevadas a cabo por el Sr. Malekpour para hacer público el programa informático permitió que tanto él como terceros pudieran acceder al código necesario para compartir imágenes en línea. Según el Comité de Derechos Humanos, el artículo 19 2), del Pacto protege todas las formas de expresión y los medios para su

⁷ Véanse los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal.

⁸ Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 83/2018, párr. 58, 52/2018, párr. 78, 19/2018, párr. 33, y 55/2013, párr. 14.

⁹ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101. Véanse también la opinión núm. 62/2018, párrs. 57 a 59, y la observación general núm. 35 (2014), párr. 22, del Comité de Derechos Humanos sobre la libertad y seguridad personales.

¹⁰ Véase también el documento A/67/369, párr. 17.

difusión, incluidos los modos de expresión electrónicos o de Internet¹¹. A juicio del Grupo de Trabajo, el Sr. Malekpour no autorizó la utilización del programa informático de ningún modo delictivo, y no se le debería haber considerado responsable de la forma en que terceros hubieran podido utilizar un programa que, por lo demás, era innovador e inocuo.

35. Nada indica que las restricciones del derecho a la libertad de expresión autorizadas por el artículo 19 3), del Pacto se apliquen en el presente caso. El Gobierno no dio ningún motivo que justificase la necesidad de perseguir penalmente al Sr. Malekpour para proteger un interés legítimo reconocido en las disposiciones de dicho párrafo, como el respeto de los derechos o la reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Además, el Gobierno tampoco demostró que la condena y la pena del Sr. Malekpour, que en un principio fue condenada a una pena de muerte conmutada ulteriormente por otra de cadena perpetua, fuese una respuesta proporcionada a su creación y compartición de un programa informático. En cualquier caso, el Consejo de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a que se abstengan de imponer restricciones en virtud del artículo 19 3), del Pacto, que no sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos¹². El Grupo de Trabajo ha decidido remitir este caso al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

36. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que la privación de libertad del Sr. Malekpour fue resultado del ejercicio pacífico de sus derechos garantizados por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto. Por consiguiente, su privación de libertad es arbitraria con arreglo a los criterios de la categoría II.

37. Partiendo de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Malekpour es arbitraria, por cuanto se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo hace hincapié en que no debería haberse celebrado ningún juicio en su contra. Sin embargo, fue juzgado, declarado culpable y después condenado (en un principio, a muerte) en diciembre de 2010. En junio de 2011, el Tribunal Supremo ordenó que el caso se sometiera a un nuevo juicio. Sin embargo, a raíz de ese segundo proceso, el Sr. Malekpour volvió a ser condenado a muerte en noviembre de 2011, pena que confirmó el Tribunal Supremo en enero de 2012. En agosto de 2013, el Gobierno conmutó la pena de muerte por otra de cadena perpetua. El Grupo de Trabajo considera que la información presentada por la fuente pone de relieve que en este largo proceso se han cometido vulneraciones flagrantes del derecho del Sr. Malekpour a un juicio imparcial. Aunque tuvo la oportunidad de hacerlo, el Gobierno no negó ninguna de las presuntas vulneraciones de ese derecho.

38. La fuente alega que el juicio del Sr. Malekpour se aplazó de manera injustificada. Como se señaló anteriormente, el Sr. Malekpour fue detenido el 4 de octubre de 2008, su juicio comenzó el 29 de noviembre de 2010 y la sentencia de primera instancia se dictó en diciembre de 2010. Por consiguiente, estuvo recluido durante más de dos años antes de ser juzgado y sentenciado en primera instancia. De conformidad con el artículo 9 3), del Pacto, esa privación de libertad no debe ser la regla, sino la excepción, y tiene que ser lo más breve posible. El Grupo de Trabajo considera que la prisión preventiva del Sr. Malekpour durante más de dos años fue excesivamente larga, en especial si se tiene en cuenta que, al parecer, no se barajaron otras alternativas, ya que hasta la fecha de su juicio el Sr. Malekpour no fue llevado ante un tribunal. La prisión preventiva no se ajustó a las normas del procedimiento ni fue debidamente reexaminada, y tampoco se respetaron sus derechos desde el momento de la detención hasta el de la sentencia dictada en primera instancia¹³. Del mismo modo, el Gobierno tampoco aportó ningún motivo que justificase una prisión preventiva tan prolongada. Como aduce la fuente, sin que el Gobierno lo haya negado, la única prueba que se presentó contra el Sr. Malekpour en su juicio fue su confesión forzada.

¹¹ Observación general núm. 34 (2011), párrs. 11 y 12, del Comité de Derechos Humanos sobre la libertad de opinión y la libertad de expresión.

¹² Resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 5 p). En esta disposición se insta específicamente a todos los Estados a que se abstengan de imponer restricciones que no sean compatibles con el artículo 19 3), del Pacto, en particular sobre la libre circulación de la información y las ideas y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, como Internet, y la utilización de tales tecnologías.

¹³ Observación general núm. 35, párr. 37.

No queda claro por qué tardó tanto tiempo el Gobierno en poner en marcha el proceso, ya que no parece que haya necesitado más tiempo para recabar pruebas adicionales. Se vulneró el derecho del Sr. Malekpour a ser juzgado dentro de un plazo razonable en virtud del artículo 9 3), del Pacto, así como su derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas con arreglo al artículo 14 3) c). Además, se vulneró también su derecho a ser informado sin demora de la naturaleza y causas de la acusación formulada en su contra, previsto en el artículo 14 3) a) del Pacto.

39. Asimismo, como se señaló anteriormente, de la información proporcionada por la fuente se desprende que, después de que se recluyera inicialmente al Sr. Malekpour en un lugar desconocido, se lo mantuvo incomunicado y confinado en régimen de aislamiento prolongado desde su detención el 4 de octubre de 2008 hasta el 16 de agosto de 2009, como mínimo. Según la fuente, el Sr. Malekpour volvió a ser recluido en régimen de aislamiento prolongado del 21 de diciembre de 2009 al 8 de febrero de 2010. En consecuencia, el Sr. Malekpour no pudo impugnar su detención al estar recluido en régimen de incomunicación y, por consiguiente, al margen de la protección de la ley. El Grupo de Trabajo concluye que de este modo se vulneró su derecho a ser reconocido como persona ante la ley, de conformidad con el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto. La reclusión del Sr. Malekpour en régimen de incomunicación y aislamiento constituye también una violación de su derecho a comunicarse con el mundo exterior, en virtud de los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y la regla 58 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las Reglas Nelson Mandela).

40. El Grupo de Trabajo considera que la prolongada reclusión del Sr. Malekpour en régimen de incomunicación y aislamiento ofrece indicios razonables de incumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura como norma imperativa del derecho internacional, del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 7 del Pacto. Este trato recrudeció los actos de violencia física cometidos contra el Sr. Malekpour y, al parecer, el objetivo que se perseguía con ello era ejercer más presión sobre su persona para lograr que confesase. Según la Asamblea General, la detención prolongada en régimen de incomunicación puede constituir de por sí una forma de tortura¹⁴. Además, todo aislamiento prolongado que se extienda durante un período superior a 15 días consecutivos contraviene las normas aplicables, como las reglas 43 a 45 de las Reglas Nelson Mandela. De conformidad con la regla 45, la imposición de la reclusión en régimen de aislamiento debe ir acompañada de ciertas salvaguardias, es decir que este régimen solo debe aplicarse en casos excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente, y únicamente con el permiso de una autoridad competente. No parece que se hayan respetado estas condiciones en el presente caso¹⁵.

41. Además, el Grupo de Trabajo considera que la fuente ha ofrecido indicios razonables de que el Sr. Malekpour fue y sigue siendo víctima de actos de tortura física. Al parecer, entre otras cosas, estos actos consistieron en palizas con porras y cables de metal (que a veces, llegaron incluso a causarle pérdidas de consciencia o parálisis), puntapiés en el rostro y otras agresiones que le produjeron una fractura de mandíbula y la rotura de varios dientes. También consistieron en despojarlo de toda su ropa, mantenerlo inmovilizado y amenazarlo con cometer agresiones sexuales violentas en su contra o actos en contra de su familia. Según la fuente, el Sr. Malekpour no recibió atención médica adecuada para resolver sus problemas de salud resultantes de estos tratos. El Grupo de Trabajo ha decidido remitir el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

42. Dada la intensidad de los presuntos actos de tortura infligidos, el Grupo de Trabajo cree que es sumamente improbable que el Sr. Malekpour hubiera sido capaz de contribuir de manera eficaz a su defensa y participar en ella, tanto en el primer proceso como en los

¹⁴ Resolución 68/156 de la Asamblea General, párr. 27. Véanse también los documentos A/66/268, párrs. 61 y 70 a 78, y A/63/175, párrs. 56 y 77 a 85.

¹⁵ Véase también la opinión núm. 52/2018, párr. 79 d).

que le siguieron, lo que da más peso a la conclusión de que las presuntas torturas vulneraron su derecho a un juicio imparcial¹⁶.

43. La fuente aduce, sin que el Gobierno lo haya negado, que a raíz de la tortura física y psicológica y los malos tratos que sufrió, el Sr. Malekpour se vio obligado a hacer una confesión amañada en la televisión nacional. Según la fuente, esta confesión fue la única prueba en que se basó la condena del Sr. Malekpour por la comisión de un delito castigado con la pena de muerte. El Grupo de Trabajo considera que la admisión como prueba de una declaración presuntamente obtenida mediante tortura menoscaba la imparcialidad de todo el proceso¹⁷. La carga de la prueba de que el Sr. Malekpour formuló libremente su declaración recae sobre el Gobierno, que no la ha aportado¹⁸. En consecuencia, se vulneró el derecho del Sr. Malekpour a la presunción de inocencia previsto en el artículo 14 2), del Pacto, así como su derecho a no ser obligado a confesarse culpable reconocido en el artículo 14 3) g).

44. El Grupo de Trabajo está alarmado por la alegación de la fuente según la cual el juez que se asignó al caso del Sr. Malekpour había supervisado muchas de las sesiones de tortura. Del mismo modo, preocupa mucho al Grupo de Trabajo que el Tribunal Revolucionario Islámico haya podido admitir como prueba la confesión del Sr. Malekpour en el juicio de primera instancia, a pesar de que este hubiera aducido reiteradamente que esa confesión se le había extraído bajo tortura. Según la fuente, el Tribunal desestimó las alegaciones de tortura y otros malos tratos calificándolas de mentiras, y por si no fuera suficiente, se volvió a admitir la confesión forzada como prueba en el nuevo proceso del Sr. Malekpour, a raíz del cual se lo condenó otra vez a muerte en noviembre de 2011. De estas alegaciones se desprende, en el mejor de los casos, que las autoridades eran indiferentes al inmenso sufrimiento causado al Sr. Malekpour y, en el peor, que tenían la firme determinación de condenarlo y conseguir su ejecución. El Grupo de Trabajo considera que esta conducta constituye una vulneración del derecho del Sr. Malekpour a un juicio con las debidas garantías ante un tribunal independiente e imparcial en virtud del artículo 14 1) del Pacto¹⁹. También constituye una vulneración grave del principio 6 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, que obliga a esta a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme al derecho, así como el respeto de los derechos de las partes. Como ha afirmado el Grupo de Trabajo, los tribunales revolucionarios no cumplen los requisitos de un tribunal independiente e imparcial²⁰. El Grupo de Trabajo remite este caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

45. La falta aparente de independencia del Tribunal Revolucionario Islámico en el caso también fue evidente en las decisiones adoptadas en el primer proceso del Sr. Malekpour. La fuente aduce que el Tribunal no accedió a la petición realizada por la defensa del Sr. Malekpour de que permitiera que un experto en tecnologías de la información prestase testimonio sobre los aspectos técnicos del programa informático. Dado que el Gobierno no ofreció ninguna explicación al respecto, el Grupo de Trabajo concluye que la negativa a permitir que el Sr. Malekpour hiciera intervenir a un testigo pericial en su defensa vulneró su derecho a obtener la comparecencia de testigos de descargo y a que éstos sean

¹⁶ En su opinión núm. 29/2017, el Grupo de Trabajo indicó que, si bien su mandato no abarcaba las condiciones de detención ni el trato de los reclusos, debía examinar en qué medida las condiciones de privación de libertad podían afectar negativamente a la capacidad de estos para preparar su defensa y a sus posibilidades de tener un juicio imparcial (párr. 63). Véanse también las opiniones núms. 53/2018, párr. 77 c), 52/2018, párr. 79 j), y 47/2017, párr. 28, y el documento E/CN.4/2004/3/Add.3, párr. 33.

¹⁷ Véanse las opiniones núms. 52/2018, párr. 79 i), 34/2015, párr. 28, y 43/2012, párr. 51.

¹⁸ Observación general núm. 32 (2007), párr. 41, del Comité de Derechos Humanos, sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.

¹⁹ El Grupo de Trabajo ha concluido anteriormente que el hecho de que un juez no intervenga cuando la tortura es evidente equivale a una violación del derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Véase la opinión núm. 29/2017, párr. 65. Si bien es posible que la tortura sufrida por el Sr. Malekpour haya pasado inadvertida en el caso que nos ocupa, sus denuncias en ese sentido se formularon claramente y merecían ser investigadas más a fondo. Véanse también las opiniones núms. 53/2018, párr. 77 b), y 46/2017, párr. 25.

²⁰ E/CN.4/2004/3/Add.2, párr. 65 1). El Grupo de Trabajo considera que esta conclusión sigue siendo pertinente; véanse las opiniones núm. 33/2019, párr. 67, 52/2018, párr. 79 f), y 19/2018, párr. 34.

interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo²¹, con arreglo a las disposiciones del artículo 14 3) e) del Pacto.

46. Por último, la fuente afirma que el Sr. Malekpour estuvo representado por un abogado pero solo se le permitió hablar con él unos minutos antes de que comenzase el juicio. Además, no se permitió que el abogado del Sr. Malekpour examinara las pruebas ni celebrara otras consultas privadas con su cliente, tan solo se le concedió un acceso limitado al expediente y se le prohibió realizar copias de este. El Grupo de Trabajo concluye que el Sr. Malekpour se vio privado de acceso a asistencia letrada durante los dos años anteriores a su juicio celebrado en noviembre de 2010. Esto vulneró su derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, reconocido en el artículo 14 3) b), del Pacto, así como su derecho a defenderse eficazmente recurriendo a un defensor de su elección en virtud del artículo 14 3) d). La falta de asistencia letrada era especialmente grave en este caso, dado que el Sr. Malekpour se enfrentaba a la pena de muerte a la que, de hecho, fue condenado²². El Grupo de Trabajo recuerda que todas las personas privadas de libertad deben tener derecho a la asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su detención, en particular inmediatamente después de que se practique la detención²³.

47. El Grupo de Trabajo concluye que se denegó completamente al Sr. Malekpour el derecho a un juicio imparcial. Por consiguiente, la vulneración de los derechos del Sr. Malekpour a un juicio imparcial es de tal gravedad que confiere a su privación de libertad carácter arbitrario con arreglo a los criterios de la categoría III.

48. La fuente sostiene que el Sr. Malekpour fue detenido y recluido por motivos discriminatorios, en especial su condición de residente permanente en el Canadá. Según indica, la detención del Sr. Malekpour se produjo a resultas del contexto político general en que se inscriben la República Islámica del Irán y el Canadá, y su carrera como ingeniero de programas de computación lo convirtió en un blanco de las autoridades iraníes. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha aportado indicios razonables, sin que el Gobierno los haya negado, de que el Sr. Malekpour fue detenido por su condición de residente permanente en el Canadá. No existen pruebas de que el Sr. Malekpour haya participado en la gestión de sitios web de pornografía. De hecho, carecía de antecedentes penales antes de que se lo detuviese, por lo que la pena de muerte (que desde entonces se conmutó por otra de cadena perpetua) parece ser una sanción completamente desproporcionada.

49. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha constatado en repetidas ocasiones que el ejercicio de la acción penal sobre personas con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad y ciudadanos iraníes es una práctica común en la República Islámica del Irán²⁴. Asimismo, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán también reconoció hace poco esta tendencia y señaló que actualmente se estimaba que al menos 30 personas con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad, así como ciudadanos iraníes con residencia permanente en otro país habían sido encarcelados desde 2015²⁵. El Grupo de Trabajo considera que el presente caso se inscribe en el marco de esa tendencia. El Sr. Malekpour fue privado de libertad por motivos discriminatorios, a saber, su condición de residente permanente en el Canadá, lo cual contraviene los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2 1) y 26 del Pacto. Por consiguiente, su privación de libertad es arbitraria con arreglo a los criterios de la categoría V.

²¹ Observación general núm. 32, párr. 39.

²² *Ibid.*, párr. 38.

²³ Véanse el principio 9 y la directriz 8 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal.

²⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 52/2018, 49/2017, 7/2017, 50/2016, 28/2016, 44/2015, 28/2013 y 18/2013. Véase también la opinión núm. 92/2017 (detención de un ciudadano iraní con permiso de residencia permanente en Suecia).

²⁵ A/HRC/37/68, párrs. 51 a 57. El Secretario General también ha expresado su preocupación por ese ejercicio de la acción penal en la República Islámica del Irán. Véase el documento A/HRC/37/24, párrs. 56 y 57.

50. El Grupo de Trabajo considera que el presente caso se refiere a violaciones graves de los derechos humanos y ha decidido remitirlo al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán para que adopte las medidas que corresponda.

51. El Grupo de Trabajo desea expresar su profunda preocupación por el estado de salud física y psicológica del Sr. Malekpour que, según la información recibida, está empeorando. Según la fuente, el Sr. Malekpour tiene problemas respiratorios y de alimentación, que se han visto agravados por la falta de atención médica y odontológica adecuada. Durante los seis últimos meses, el Sr. Malekpour ha sido hospitalizado dos veces de urgencia, pero se le deniega la atención médica de seguimiento que necesita urgentemente. El trato dispensado al Sr. Malekpour no se ajusta a las normas establecidas, por ejemplo, las reglas 1, 24, 25, 27 y 42 de las Reglas Nelson Mandela. Dado que el Sr. Malekpour lleva privado de libertad casi 11 años, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lo ponga en libertad de manera inmediata e incondicional, y a que vele por que reciba la atención médica necesaria.

52. Este es uno de los varios casos presentados al Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la privación arbitraria de libertad en la República Islámica del Irán²⁶. El Grupo de Trabajo observa que muchos de los casos en que está involucrada la República Islámica del Irán se refieren a prácticas similares de detención y reclusión que no se ajustan a las normas internacionales, como la reclusión preventiva prolongada sin posibilidad de revisión judicial, la denegación de asistencia letrada, la reclusión en régimen de incomunicación y aislamiento, el enjuiciamiento por delitos enunciados de manera imprecisa y motivados por el ejercicio pacífico de derechos humanos, la celebración de juicios a puerta cerrada y procesos de apelación ante tribunales que no gozan de independencia, la imposición de penas desproporcionadamente severas, los actos de tortura y malos tratos, y la denegación de atención médica. El Grupo de Trabajo recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras situaciones graves de privación de libertad en violación de las normas de derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad²⁷.

53. El Grupo de Trabajo celebraría la oportunidad de colaborar constructivamente con el Gobierno para abordar la cuestión de la privación arbitraria de libertad en la República Islámica del Irán. Habida cuenta de que ha transcurrido un período de tiempo considerable desde su última visita a la República Islámica del Irán (realizada en febrero de 2003), el Grupo de Trabajo considera que es el momento oportuno para visitar el país de nuevo. El Grupo de Trabajo recuerda que el Gobierno cursó una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales temáticos el 24 de julio de 2002, y espera una respuesta positiva a su última solicitud de visita formulada el 19 de julio de 2019.

54. Por último, el Grupo de Trabajo observa con preocupación que el Gobierno no haya aprovechado la oportunidad de responder a las graves alegaciones formuladas en el presente caso, en particular las relativas a la denegación de un juicio imparcial al Sr. Malekpour, a quien se ha privado de libertad durante casi 11 años, y a la comisión de actos de tortura en repetidas ocasiones en contra de este. Estas circunstancias requerían una justificación convincente, que el Gobierno no proporcionó. Dado que las prácticas de la República Islámica del Irán en materia de derechos humanos se analizarán durante el tercer ciclo del examen periódico universal en noviembre de 2019, el Gobierno podría aprovechar esta oportunidad para estrechar su cooperación con los procedimientos especiales y armonizar su legislación con el derecho internacional de los derechos humanos.

Decisión

55. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Saeed Malekpour es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos

²⁶ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 33/2019, 83/2018, 52/2018, 19/2018, 92/2017, 49/2017, 48/2017, 9/2017, 7/2017, 50/2016, 28/2016, 25/2016, 2/2016, 1/2016, 44/2015, 16/2015, 55/2013, 52/2013, 28/2013 y 18/2013.

²⁷ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 47/2012, párr. 22.

Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14, 16, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

56. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Islámica del Irán que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Malekpour sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

57. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, en particular el serio riesgo de daño al bienestar físico y psicológico del Sr. Malekpour, el remedio adecuado sería poner al Sr. Malekpour inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

58. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que vele por que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Malekpour, en particular las alegaciones relativas a su tortura, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

59. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que armonice su legislación, en particular los artículos 286, 500, 513 y 514 del Código Penal Islámico, con las recomendaciones formuladas en la presente opinión y los compromisos contraídos por la República Islámica del Irán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

60. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a los siguientes relatores especiales para que tomen las medidas correspondientes: a) el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, b) el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, c) el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y d) el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.

61. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

62. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) si se ha puesto en libertad al Sr. Malekpour y, de ser así, en qué fecha;
- b) si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Malekpour;
- c) si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Malekpour y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República Islámica del Irán con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

63. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

64. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al

Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

65. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado²⁸.

[Aprobada el 12 de agosto de 2019]

²⁸ Véase la resolución 33/30 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.